











































































**Amparo en  
revisión  
72/2023**

Por otra parte, contrario a lo que refiere la A quo, la autoridad responsable al emitir el acto que se reclama no vulneró los derechos de adecuada defensa, acceso a la justicia, a la información y a la seguridad jurídica, toda vez que el **Agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación de Secuestro 'B' adscrita a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**, refirió que si bien consta en la averiguación previa \*\*\*\*\* , actuaciones en las que fue recabada la declaración de la persona de nombre \*\*\*\*\* , también lo es que, en la actualidad dentro de dicho expediente no se ha ejercitado la acción penal contra ninguna persona, toda vez que en los hechos presentados por la denunciante de identidad reservada de iniciales \*\*\*\*\* acontecidos en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales \*\*\*\*\* , **quién** ejercitó la acción penal por tales eventos fue la entonces Procuraduría General de La República (Hoy Fiscalía General de la Republica), señalando que en la citada averiguación previa hasta el momento no se ha solicitado a ninguna autoridad judicial algún ordenamiento, tampoco se ha girado ninguna orden de investigación, localización o presentación, en contra de ninguna persona, así tampoco se ha girado citatorio, orden de comparecencia o presentación, manifestando además que no cuenta con elementos o indicios que hagan presumir que se ejercitara la acción penal en contra de determinada persona, de ahí que se considere inexacto lo expuesto por la Juez de amparo.

Además, debe señalarse que la responsable argumentó que en el caso de intentar duplicar el ejercicio de la acción penal dentro de la indagatoria \*\*\*\*\* , estaría

en el supuesto establecido en el artículo 23 constitucional, dejando establecido que quien ejerció la acción penal por el delito denunciado fue su homologo investigador de la federación, toda vez que en la causa penal **\*\*\*\*\***, el juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó sentencia en la que señaló que la hoy quejosa es penalmente responsable de la comisión de los delitos de: privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de la persona de identidad reservada de iniciales **\*\*\*\*\***., razón por la cual la autoridad responsable señaló que no hay motivo alguno para comparecerla como probable responsable en la indagatoria antes referida, por lo que, se aprecia que no se le está violentando ningún derecho.

Así las cosas, contrario a lo que señaló la A quo, respecto a que se le viola su derecho a una defensa adecuada a la hoy quejosa, debe decirse que el derecho a una defensa adecuada, implica que se le faciliten los datos que consten en la investigación y requiera para su defensa; asimismo, impone al Ministerio Público a mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la investigación, existiendo momentos a partir de los cuales la parte investigada y su defensor pueden tener acceso a dicha información, más no así a que se le expidan copias.

Por tanto, en atención al artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 30 y 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, existe una restricción al ejercicio del derecho de defensa, para mayor ilustración, se transcriben los artículos mencionados:

**‘Artículo 1.** En los Estados Unidos Mexicanos todos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados



*Pero además, debe considerarse que la calidad de inculpada que se le dio a la ahora quejosa, en la averiguación previa, es una calidad que puede variar con el tiempo, o no trastocar jamás la esfera jurídica de esa persona, como ha sucedido hasta ahora, toda vez que fue desde el 2006, no se le ha vuelto a citar y además no se le ha causado perjuicio con la investigación que se lleva a cabo actualmente, pudiendo el Ministerio Público reclasificar.*

*Es decir, no hay certeza de la quejosa continúe siendo inculpada, como en un momento se consideró, o que la averiguación previa sufra algún no ejercicio de la acción penal, reserva o se envíe a archivo, sin que nunca se consigne o forme parte de un procedimiento penal, por lo que es válido que el Ministerio Público, reserve la posibilidad de acceder o de facilitar copias a la quejosa. EL A quo tampoco pidió informes suficientes para cerciorarse del curso que puede llevar a cabo ese servidor público, respecto de la averiguación.*

*Ese Derecho de la quejosa, posee límites, pues hay que recordar que las facultades y prerrogativas que otorgan a Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México y las demás leyes que existen en nuestro sistema jurídico, no son absolutos, hay excepciones y salvedades, como bien se manifiesta en el siguiente precedente judicial:*

*Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 2020052  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Décima Época  
Materias(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.59 P (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la  
Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página  
5071  
Tipo: Aislada*



## **R.P. 72/2023**

*a las formalidades esenciales del procedimiento, debiendo precisar la normatividad aplicable y externar las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tenga en cuenta para la emisión del acto, las cuales deben guardar relación y coherencia entre sí.*

*Por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación, la expresión de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; en la inteligencia que no se refiere sólo a aquéllas resoluciones definitivas o que pongan fin al procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones.*

*A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del contenido siguiente:*

*Suprema Corte de Justicia de la Nación*

*Registro digital: 203143*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Novena Época*

*Materias(s): Común*

*Tesis: VI.2o. J/43*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 769*

*Tipo: Jurisprudencia*

***‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’***

*Por Lo que contrario a lo manifestado por la A quo, se solicita se revoque la sentencia que se impugna y se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. (...)*

### **Revisión adhesiva.**

La quejosa \*\*\*\*\* , por conducto de su autorizado, expuso como agravios lo siguiente:



*interpusieron ante la Procuraduría local, es increíble que a 17 años de dicha.*

*3. El temor de la quejosa sobre una investigación en su contra **no es infundado.** Debido a que como se demostró plenamente en el juicio de garantías, la responsable no se ha conducido con verdad. Primero, negando que a \*\*\*\*\* hubiese sido entrevistada como testigo. Segundo, manifestando que dicha carpeta se encontraba concluida. Cuando, en la especie no se ha decretado ningún acuerdo de sobreseimiento o cualquier situación, a pesar de que los hechos ya hubieren sido consignados ante las autoridades federales, exista diversas resoluciones condenatorias y no se haya demostrado que en el fuero común se está investigando hechos distintos.*

*La autoridad responsable vulnera las garantías judiciales de la quejosa al impedirle el acceso a las constancias de la averiguación previa la averiguación previa \*\*\*\*\**

**\*\***

*Como el ministerio público dejó asentado, a \*\*\*\*\**  
*\*\*\*\*\**, le asiste el carácter de probable responsable en la citada indagatoria. Pues no basta la simple manifestación de la autoridad en donde señala que no le puede reconocer ninguna calidad jurídica, lo cierto es que tampoco existe una determinación sobre la citada indagatoria donde se establezca que la hoy quejosa no tiene relación con los hechos que se investigan. A pesar de haberse judicializado la averiguación  
*\*\*\*\*\**, de manera inexplicable, la indagatoria *\*\*\*\*\** se mantuvo abierta de forma paralela y' rio obstante, en la primera se dictó una sentencia, la segunda se mantuvo por más de 17 años sin ninguna determinación.

*Como se señaló y precisó en el escrito previo, la autoridad responsable llevó a cabo diversos actos de molestia en contra*





En el caso *Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala*<sup>3</sup>, la Corte Interamericana determinó en relación con las garantías judiciales, los Estados no deben poner obstáculos que limiten el acceso a la justicia:

95. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana, la Corte ha establecido, *inter alia*, que ‘es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada representación o gestión de los intereses o las pretensiones de aquellos cuyos derechos u obligaciones estén bajo consideración judicial’. Asimismo, esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer obstáculos a las personas que acudan a los jueces o tribunales con el fin de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o práctica del orden interno que dificulte el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.

Es dable determinar que por los delitos sobre los que fue sentenciada la quejosa, no podría coexistir una averiguación previa en el fuero común. Como es de su conocimiento, la quejosa y otras tres personas fueron sentenciadas desde 2012 por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y homicidio en agravio de \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* o \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Por lo que, en un ejercicio básico de razonamiento, es evidente que cualquier otra

---

<sup>3</sup> Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190.

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

acusación que subsistiera en el fuero común tendría que remitirse al fuero federal pues sería de única y exclusiva competencia.

Aunque no se explica por qué a más de 10 años de que se conoció la sentencia de \*\*\*\*\* dictada en el fuero federal haya continuado la licenciada \*\*\*\*\* con la substanciación de la carpeta de investigación.

Amén de que no se actualiza ningún elemento sobre el cual la responsable deba mantener el sigilo y negar a la quejosa el derecho de acceso a la justicia en relación con la falta de fundamentación y motivación que deben regir los actos de molestia que acontecieron en contra de la hoy quejosa.

La averiguación previa que la autoridad responsable insiste en reservar, no se encuentra determinada, no obstante, haberse comenzado a integrar desde hace más de 15 años (julio 2005)

Si bien la quejosa ha sido sentenciada en segunda instancia y se encuentra en trámite el amparo directo en revisión \*\*\*\*\* del cual se encuentra conociendo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la carpeta en la que por más de 15 años se han realizado actuaciones de forma paralela al fuero federal, hoy en día se encuentra sin determinar.

Aunque la autoridad responsable manifestó que en atención al principio non bis in ídem no podría ejercitar acción penal en contra de la hoy quejosa puesto que ya se encuentra sentenciada en el fuero federal por los mismos hechos, al mismo tiempo no existe una explicación plausible por la cual no se haya sobreseído, archivado definitivamente o no se haya emitido cualquier forma de determinación procedente.

Es importante hacer del conocimiento de esta Juzgadora que la agente del ministerio público señalada como





responsable, mismos que tienen por objeto coartar el derecho a la defensa de la probable responsable.

Como se mencionó en el primer escrito de alegatos, en la primera respuesta a la solicitud de copias de la indagatoria la autoridad señalada como responsable precisé que la quejosa no tiene calidad jurídica' para acceder a dichas constancias pues los hechos materia de la investigación 'fueron resueltos por la entonces Procuraduría General de la República'<sup>4</sup> (Anexé previamente como prueba dicha determinación), a saber:

Amparo en revisión 72/2023

**Y QUE SI BIEN EN SU MOMENTO OBRA AGREGADO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE LA DECLARACIÓN DE LA PERSONA QUE RESPONDE AL NOMBRE DE \*\*\*\*\***

SE REITERA QUE EN ESTE MOMENTO DEL AÑO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, NO EXISTEN CONSTANCIAS CON LAS CUALES DARLE ALGUNA CALIDAD JURÍDICA, MÁXIME QUE LA SITUACIÓN JURÍDICA POR LOS EVENTOS ACONTECIDOS EN AGRAVIO DE LA VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES \*\*\*\*\* FUERON RESUELTOS POR LA ENTONCES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LO TANTO LOS INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMBATE A LA TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, NECESARIAMENTE DEBERÁN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD QUE EN SU CASO DENTRO DEL PRESENTE EXPEDIENTE LES OTORGARÍA LA PERSONA QUE RESPONDE AL NOMBRE DE \*\*\*\*\* [Lo resaltado es propio]

El 12 de septiembre de 2022, en su segunda respuesta a la solicitud de copias simples, la autoridad señalada como responsable afirmó que a la quejosa \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* se le recabé un interrogatorio en enero de 2006, y que agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitaron ingresar al centro donde se

<sup>4</sup> Anexé previamente como prueba el acuerdo ministerial del 23 de agosto de 2022 emitido por la autoridad señalada como responsable, agente del ministerio público \*\*\*\*\*

encontraba arraigada la quejosa para practicar esta diligencia. A pesar de ello, la autoridad señalada como responsable no se pronunció respecto al hecho de que la quejosa, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, sí tiene el carácter de imputada en la \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* y que se le recabaron diversas declaraciones por agentes ministeriales locales:

POR CUANTO HACE ‘...tengo conocimiento que, mediante el oficio del 13 de enero de 2006, suscrito por \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* se requirió, dentro de esta indagatoria, al Titular de la U.E.I.S. de la Procuraduría General de la República el acceso para interrogarme, y que se me haga saber mis derechos ‘como probable responsable de los delitos de secuestro y homicidio en agravio de \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Tal como se acredita con el documento adjunto...’ **AL RESPECTO ESTA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESTABLECE QUE ES CIERTA DICHA MANIFESTACIÓN, SIN EMBARGO, ES OPORTUNO HACERLE DEL CONOCIMIENTO A LA PROMOVENTE QUE EL OFICIO A QUE HACE ALUSIÓN ES DEL AÑO DE 2006, POR LO QUE COMO QUEDO SEÑALADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, EN ESTE MOMENTO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, NO EXISTE MOTIVO O RAZÓN ALGUNA PARA DARLE CALIDAD JURÍDICA A LA PROMOVENTE. [Lo resaltado es propio]**

A pesar de ello, esta negativa de la agente del ministerio público ha tenido repercusiones en el derecho de adecuada defensa, pues se trata de un caso que ha trascendido a la opinión pública y ha tenido implicación en la causa penal donde la quejosa fue sentenciada, mediante la cual se substanciaron y llevaron a cabo diversas actuaciones cuestiones relacionadas con la denuncia de hechos que, para el caso es la misma en el fuero común que en fuero federal, aun cuando sean dos distintos denunciantes, ambos coinciden en denunciar la desaparición y el probable secuestro de \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*







**R.P. 72/2023**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

limitada y sin ser precisa sobre el material probatorio que obra en contra de \*\*\*\*\* ni de los señalamientos que pueden pesar en su contra.

Por lo previamente expuesto, respetuosamente solicito se proporcionen copias de toda la indagatoria completa \*\*\*\*\*, ya que como se ha expuesto la quejosa tiene el carácter de probable responsable y, hasta la fecha no ha pedido consultar ni revisar el contenido de esas constancias. Esta petición no implica ningún tipo de daño social ya que la autoridad señalada como responsable ha determinado que no existe ningún mandamiento de captura, y se manifestó que probablemente se determine el no ejercicio de la acción penal.

No obvio manifestar ante este órgano jurisdiccional, que si bien es cierto que la averiguación previa \*\*\*\*\* \*\* se encuentra sustanciándose bajo los principios que rigen el sistema penal inquisitivo mixto, los derechos de los imputados que se consagran a nivel constitucional, deben de ser respetados y garantizados bajo los principios que rigen tanto el sistema adversarial como el sistema acusatorio, de ahí que el suscrito a lo largo del presente realice referencia a criterios que aluden a los derechos de los imputados consagrados a nivel constitucional, mismas que se encuentran atendiendo a casos motivados por el sistema acusatorio.

Por otro lado, es importante garantizar la participación de los imputados y/o probables responsables dentro de las investigaciones, así como el respeto y protección de los derechos que les asisten cuando se encuentren bajo tales supuestos. Pues, lo que, el derecho fundamental que se violentaría con su negativa a conceder el amparo es el derecho a la verdad.

*El acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del estado de derecho. Su aseguramiento constituye, desde luego, parte toral del pacto social, donde la existencia de un tribunal sirva, ínter alía, para dirimir las diferencias y conflictos entre particulares o entre los particulares y el Estado. En este sentido lo ha expresado la Corte Interamericana al resolver el caso Cantos vs Argentina donde consideró que el derecho a un recurso efectivo constituye:*

50. (...) El artículo 8.1 de la Convención (...) consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. (...)

52. El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. (...) La Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. (...) la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. (...) La garantía de un recurso efectivo 'constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención' y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad (...)<sup>7</sup>

*En el Caso Rosendo Radilla vs México la Corte IDH reiteró que el derecho a la verdad forma parte intrínseca del derecho de la víctima o víctimas y de sus familiares. En el caso concreto, conviene hacer mención sobre la importancia de determinar qué fue lo que aconteció para que durante más de 17 años se mantuviera una indagatoria cuando en el fuero*

---

<sup>7</sup> Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párrs. 50 y 52.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

*federal ya se encontraba relacionado el caso e incluso en menos de un año se habían girado algunas órdenes de aprehensión, entre ellas la de la quejosa. Además de ser un caso trascendental para la justicia mexicana, es evidente que su importancia trastoca el derecho de defensa adecuada y la posibilidad de que un ministerio público lleve a cabo actos de autoridad y de molestia sin que medie ningún mandamiento judicial. Y, sobre todo, sin que haya tenido que rendir cuentas a ninguna autoridad superior, pues es claro, que no hubo ninguna supervisión ni mandamiento que explique por qué se mantuvo en trámite una indagatoria que no tenía ninguna línea de investigación. A pesar de ello, siempre tuvo duplicidad de actuaciones entre las que realizaron en el fuero federal.*

*Por lo que, este Juzgado tiene en este momento la importante decisión de resolver sobre un caso que va más allá de la negativa a otorgar copias: su importancia trasciende el derecho a la verdad reconocido internacionalmente. Al respecto, en el caso Radilla se estableció:*

*[...] la Corte recuerda que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.*

*El derecho a la verdad tiene una relación directa e inmediata con el derecho de acceso a la justicia. Internacionalmente, como se dijo, se ha reconocido la obligación de los Estados parte de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. La violación del derecho de acceso a la justicia en su vertiente del ejercicio de derecho de defensa, estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana:*

234. Este Tribunal considera necesario reiterar lo que ya ha señalado constantemente en cuanto a que conforme a la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como ‘la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos’. Para cumplir con dicha obligación, el Estado tiene que combatir ésta por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad ‘propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares’. Asimismo, el Estado tiene que ‘organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos<sup>8</sup>’.

La litis de este caso trastoca el derecho a conocer verdad histórica sobre hechos presuntamente delictivos, con alcances y repercusiones graves en la esfera jurídica de la hoy quejosa, el resto de las personas imputadas en la causa penal \*\*\*\*\* y, sobre todo, que no hay una explicación plausible por la que se tenga que mantener en sigilo.

Por último, se solicita a este Tribunal Colegiado, ponderar los elementos que fueron estudiados en la resolución de amparo y que, dicho sea de paso, no causan ninguna afectación a la autoridad ministerial en su papel de representación social.

(...)”

#### QUINTA. Estudio.

Es innecesario analizar los agravios expuestos ya que este Tribunal Colegiado advierte una **violación a las reglas**

<sup>8</sup> Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

**fundamentales del procedimiento** en el juicio de amparo indirecto que se revisa que trascendió al resultado del fallo, lo cual conlleva a su **reposición**, conforme al artículo 93 fracción IV de la Ley de Amparo, lo anterior, debido a que no se emplazó a la parte tercera interesada.

**Antecedentes.**

1. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, \*\*\*\*\* , por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal contra el acto consistente en:

- El acuerdo de **doce de septiembre de dos mil veintidós**, emitido en la averiguación previa número \*\*\*\*\*

\*\* en que la autoridad ministerial responsable negó (1) otorgar copias simples de dicha indagatoria, así como acceso a la misma y (2) tener por designados como defensores a los profesionistas de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, señalados por la quejosa.

Acto que se atribuyó a la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad 8 de la Agencia de Secuestros “B” de la Agencia de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*).

2. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Amparo recurrida, admitió la demanda y, entre otros aspectos, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable. Sin que realizara pronunciamiento alguno en cuanto a quién pudiera tener el carácter de tercero interesado.

3. Por oficios presentados el veinticinco de octubre de dos

Israel Jimenez Carrillo  
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4615  
26/10/23 14:34:42

mil veintidós, la autoridad ministerial responsable rindió informe justificado y su complemento, en el que aceptó el acto que se le atribuyó, además de sus manifestaciones y las constancias que adjuntó al mismo se advierte, en lo que interesa, que:

- El trece de julio de dos mil cinco, inició la indagatoria **\*\*\*\*\***, derivado de la denuncia presentada por **\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***, por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de **\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***.
- El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Ministerio Público de la Ciudad de México solicitó copias de la averiguación previa **\*\*\*\*\***, tramitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, toda vez que ésta se aperturó derivado de la denuncia realizada el trece de julio de dos mil cinco, por **\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\***, respecto a los mismos hechos relacionados con el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y otros, en agravio de **\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***.
- En la indagatoria **\*\*\*\*\*** (origen), se realizaron diversos actos de investigación; sin embargo, al momento de rendir el comunicado de ley, se precisó que no se había ejercido acción penal contra persona alguna, ni había alguna orden vigente, mucho menos respecto de **\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***, para no duplicar el ejercicio de la acción penal y evitar contravenir el supuesto establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en autos de la averiguación previa indicada existe copia de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil once, en la que el entonces Juez Décimo Sexto de Distrito de



dictado de la sentencia respectiva el **veintidós de diciembre de dos mil veintidós**, en la que concedió para efectos el amparo solicitado, sustancialmente, porque:

- De las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas a la averiguación previa de donde derivó el acto reclamado, se advertía que la quejosa tenía la calidad de “*indiciada*”; por ende, la agente del Ministerio Público estaba obligada a respetar el derecho establecido en el “*artículo 20, apartado ‘A’, fracciones I, V, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”, que dispone que dentro de la etapa de averiguación previa al “*inculpado*” le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa; por ello, dijo la A quo, era inconcuso que la quejosa se encontraba legitimada para obtener copias de lo actuado en la averiguación previa.
- Por otra parte, estimó el Juzgado recurrido fue desacertado lo expuesto en el acuerdo reclamado en el sentido que no se acordó favorablemente la designación de defensores realizada por la quejosa, porque no tiene el carácter de imputada; sin embargo, de las constancias de la averiguación previa, se observaba que la peticionaria de amparo tenía el carácter “*imputada*”; por tanto, la autoridad ministerial se encontraba constreñida a respetar su derecho fundamental de defensa adecuada, previsto en el artículo 20, Apartado A, fracciones VII y X, de la Constitución Federal.
- Con base en lo anterior, concedió el amparo para efecto de que la autoridad ministerial responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado de doce de septiembre de dos mil veintidós y dictara otro en el que ordenara la expedición de copias solicitadas por la





quejosa y debía tener por designados a los profesionistas nombrados por ésta.

Sentencia materia del presente medio de impugnación.

7. Por oficio presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la autoridad ministerial responsable informó al Juzgado recurrido que con motivo de que se le notificó la sentencia de amparo, emitió el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que ordenó la expedición de copias de la averiguación previa **\*\*\*\*\***, y tuvo por designados a los profesionistas nombrados por la impetrante de amparo; no obstante, mediante diverso acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, debido a que se interpondría el presente recurso de revisión, dejó sin efectos el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

Establecido lo anterior, resulta pertinente precisar al constituir un pronunciamiento de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que contrario a lo alegado por el quejoso adherente en el presente recurso de revisión, que en el particular no se actualiza la improcedencia del juicio de amparo que se revisa bajo el argumento que sostiene que el acto reclamado fue sustituido procesalmente por un acto posterior, al referir que ya se autorizó la entrega de las copias solicitadas e incluso se señaló fecha para su entrega.

Sin embargo, ello resulta desacertado, en virtud de que como se indicó, la autoridad ministerial responsable si bien había acordado de manera favorable lo petitionado por la quejosa (copias y defensores), no obstante con posterioridad dejó sin efectos dicho auto, volviendo las cosas al estado en

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

que se encontraban previo al dictado de la sentencia amparadora.

Máxime que al pretender dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia amparadora en contra de actos negativos como los actos reclamados, su acatamiento es vinculante hasta en tanto cause firmeza el fallo indicado, pues hasta ese momento se hace vinculatoria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 162654, Novena Época, publicada en marzo de dos mil once, que dice:

**“AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE.** Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes. De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una







necesario atender a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

**Amparo en  
revisión  
  
72/2023**

*“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...)*

*III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (...)*

*c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;”*

Del numeral transcrito y en lo que al caso interesa, se aprecia que es parte en el juicio de amparo con el carácter de tercero interesado, **entre otros, la víctima del delito u ofendido**, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad, supuestos que si bien podrían converger, también se actualizan de manera autónoma de acuerdo con el caso concreto.

En el caso, la quejosa \*\*\*\*\*, \*\*, \*, \*\*, , promovió el juicio de amparo indirecto que se revisa, en el que señaló como acto reclamado el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, emitido en la averiguación previa número \*\*\*\*\* en el que la autoridad ministerial negó

**(1) otorgar copias simples** de dicha indagatoria, así como acceso a la misma y **(2) tener por designados como defensores** a los profesionistas de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Cuelles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, señalados por la quejosa.

Dicho acto fue atribuido a la agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación de Secuestro “B” adscrita a la

## R.P. 72/2023

Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*), y que como se indicó, tiene su origen en las actuaciones que integran la citada Averiguación Previa.

Así, de las constancias de autos se advierte que dicha averiguación previa \*\*\*\*\* inició derivado de la denuncia presentada por \*\*\*\*\* , por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de \*\*\*\* \*\*\*\*\* ; en la que entre otros actos de investigación se recabaron diversas declaraciones de \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , quien acreditó ser madre de \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* .

Además, si bien no existe constancia de la que se advierte que se haya ejercido acción penal contra persona alguna en dicha indagatoria, ello lo justificó la autoridad responsable ante el diverso ejercicio de la pretensión punitiva verificado en la diversa averiguación previa \*\*\*\*\* , tramitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, lo que derivó en el trámite de la causa penal \*\*\*\*\* , en el entonces Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (ahora causa penal \*\*\*\*\* del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México), en el que el diecinueve de abril de dos mil once se emitió sentencia de condena contra la peticionaria de amparo en el juicio de origen.

En esas condiciones, y sin desatender que en la indagatoria de origen no existe constancia de la que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se haya continuado con la integración de la misma, ello no



Amparo en  
revisión  
72/2023

constituye motivo alguno que conduzca a estimar que en el trámite de la misma, la declarante \*\*\*\*\*

le recaee el carácter de víctima indirecta al haberse reconocido en dicha indagatoria que se trataba de la progenitora de la víctima directa, de conformidad con los artículos 4 y 14 de la Ley General de Víctimas.

Sin que obste a lo anterior que la solicitante de la protección constitucional, en su escrito de demanda señalara, bajo protesta de decir verdad, que desconocía la existencia de la parte tercera interesada, a pesar que en el apartado de antecedentes hizo referencia al juicio de amparo directo \*\*\*\*\*, que promovió con motivo de la sentencia definitiva dictada en el toca penal \*\*\*\*\*, derivado de la causa penal \*\*\*\*\*, actualmente \*\*\*\*\*, cuyo origen lo fue la averiguación previa \*\*\*\*\*, expediente penal en el que expresamente se reconoció el carácter de víctima indirecta a la nombrada \*\*\*\*\*, y que se observa fue emplazada al controvertido de amparo referido con tal carácter.

Toda vez que, en atención a las constancias de autos, la Jueza de Distrito recurrida debió advertir que a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , conforme a los preceptos 5 fracción III inciso c) de la Ley de Amparo y 4 de la Ley General de Víctimas, le correspondía la calidad de víctima indirecta en la comisión del delito materia de la indagatoria de origen y por ende que contaba con el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo que se revisa y que entre sus prerrogativas se encontraba la de intervenir en el juicio de derechos fundamentales de que se trata.

Israel Jimenez Carrillo  
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.46155  
26/10/23 14:34:42

Es aplicable la tesis aislada 1a. LXXXI/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 2014698, Décima Época, publicada el siete de julio de dos mil diecisiete, que indica:

**“VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN Y CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).** Esta Primera Sala ha sostenido que el derecho de las víctimas a participar y ser escuchadas en el juicio de amparo (incluso en su carácter de terceros) no debe limitarse a los aspectos relativos a la reparación del daño. De acuerdo con la interpretación sostenida por este alto tribunal, el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la verdad exige que la víctima u ofendido del delito sea llamada y escuchada en relación con otros aspectos del proceso penal, como sería la acreditación del delito, la atribución de responsabilidad y la individualización de las sanciones. De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada, al señalar que tendrá el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño "siempre que los actos reclamados afecten dicha reparación o responsabilidad", resulta infraincluyente tratándose de la víctima u ofendido del delito, pues claramente excluye la posibilidad de reconocerle el carácter de parte dentro del juicio y, por tanto, de que sea debidamente escuchada y que esté en aptitud de hacer valer sus intereses, en aquellos casos en los que no se vea afectado, directa o indirectamente, el derecho a una justa indemnización. En ese sentido, a fin de no hacer nugatorios o restringir desproporcionadamente los derechos de las víctimas, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no debe leerse de manera literal o textual, sino de conformidad con el principio de acceso a la justicia, de tal manera que se permita su participación dentro del juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicado, aun y cuando el acto reclamado no afecte o incida en la reparación del daño. En otras palabras, el operador jurídico debe tomar en consideración que la porción normativa que señala "siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad", aunque pudiera ser constitucional en otros supuestos (por ejemplo, en el caso de aquellas personas que sin tener el carácter de víctimas u ofendidos del delito tengan





que debe ordenarse la reposición del procedimiento; ello en razón de que, la sentencia recurrida concedió la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, situación que en el particular afecta los derechos de la víctima indirecta.

Cobra aplicación la jurisprudencia 44/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200086, Novena Época, publicada en julio de mil novecientos noventa y seis, que dispone:

**“TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.** Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría



*general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución.”*

En consecuencia, al vulnerarse las normas fundamentales que regulan el procedimiento del juicio de amparo, lo que trascendió al dictado de la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la ley de la materia, se **revoca** la resolución recurrida y se ordena la reposición del procedimiento, para que la Jueza de Distrito:

1. Deje sin efecto la audiencia constitucional.

2. Con apoyo en los artículos 115 y 116 de la Ley de Amparo, emplace de forma legal a la parte tercera interesada, para lo cual podrá atender al escrito con el que ya se apersonó al juicio y dado que ya obra el informe justificado rendido por la autoridad ministerial responsable, en términos del numeral 117 de dicha normatividad, le dé vista con él y las constancias que se adjuntaron al mismo y aquellas que se recabaron de manera oficiosa

3. Hecho lo anterior, continúe con la tramitación del juicio hasta el dictado de la sentencia correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se



R E S U E L V E :

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo en  
revisión  
72/2023**

**PRIMERO.** Se **revoca** la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** Se ordena la **reposición del procedimiento** en el juicio de amparo indirecto **\*\*\*\*\***, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los términos precisados en esta ejecutoria.

**Notifíquese;** con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

En atención al artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la presente resolución. Se autoriza al Secretario de Tribunal para que firme los oficios correspondientes.

Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por **unanimidad** de votos de la Magistrada Presidenta **Silvia Estrever Escamilla**, el Magistrado **Enrique Martínez Guzmán** y el Magistrado **Jorge Isaac Lagunes Leano** (ponente).

**Firmado electrónicamente.-** La Magistrada Presidenta **Silvia Estrever Escamilla.-** El Magistrado **Enrique Martínez**

**Guzmán.- El Magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano.- y el Secretario de Tribunal Israel Jiménez Carrillo.**

**Israel Jiménez Carrillo**, Secretario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, hace constar: que el presente asunto se resolvió en sesión ordinaria de **tres de agosto de dos mil veintitres**; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 26 bis, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. **Conste.**

PJF - Versión Pública



## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

### EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

59234364\_050000032234624008.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	Israel Jiménez Carrillo	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.46.b5	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	09/08/23 18:50:38 - 09/08/23 12:50:38	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	61 00 8c 2b dd 86 ad 56 28 c7 a6 45 f2 27 ca 89 d4 c7 b1 cf e0 f7 c6 16 a8 48 a2 58 ce 3c 8a 48 77 9a a3 7a 74 14 65 d2 b1 d1 34 2b 1f ed 19 10 cf 15 6c 8e e4 0e 18 4c 13 f2 e3 28 59 a9 7a d9 c2 a9 b7 48 83 5c 1b 75 db 6f 14 6a fc d5 4e 6f 58 69 f8 0f 5b 7b c6 3c bf 02 a3 c2 8b 73 d7 ae 59 23 c6 59 d5 c1 22 78 c7 50 2a c4 1a 85 66 b4 d0 4d 28 a9 1e a5 5e e1 0a ca ae ad fb 0b 53 ff 42 87 b5 1d e4 7b 1a 7d e6 df 2c d4 e8 13 2a 73 1f b7 0c fe 97 8b 03 bd 4a 2a 98 cb 56 52 74 1f 32 48 5e 99 56 b0 6d 06 23 c5 25 f4 ab d7 cb dd f7 d3 f2 ac 3f a1 57 a5 1b 97 a1 dc 8d 95 2b fa 88 a2 57 8c 1f 22 69 25 b6 c4 7a 4d bc 4d 23 23 ee 4d 28 72 04 39 d5 aa a5 30 a3 82 91 37 b8 c8 53 88 aa da d4 56 24 cc 74 d6 11 12 5e a7 59 eb 46 dd df 1e e9 73 9d ed f0 7c 71 68 67 ab 2c 92			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 18:50:38 - 09/08/23 12:50:38			
<b>Nombre del respondedor:</b>	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 18:50:38 - 09/08/23 12:50:38			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	29210292			
<b>Datos estampillados:</b>	MGJE1wbQwb7wXLE01fBDLttqLBc=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	JORGE ISAAC LAGUNES LEANO	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	09/08/23 22:29:32 - 09/08/23 16:29:32	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	58 80 8d 49 6a 49 80 aa 65 ac 30 78 b5 59 fd 55 ab 35 1a 8c 5f 25 e6 70 3c 6d 40 c1 0d c0 d2 dc 02 1c 06 99 c0 d1 65 b6 aa bc e5 44 87 24 76 70 74 94 74 ee b0 fb ac 8d d1 f2 7e a4 54 a7 b9 ae e9 82 20 ec d3 06 3b 65 e1 31 4f 99 3a 22 cc 6a ff dc 3c 44 a2 fa fe c4 69 d2 c0 a2 06 4c 2e 49 a2 65 8a 34 ef 91 b4 4e 88 d6 53 e7 2d de bd 2e 69 f5 93 6d 6d b9 00 a6 23 69 89 4a bb e5 63 4a 99 02 00 d7 33 a4 aa 2c 02 57 64 7e cf 19 31 01 7b ff 8f 8b 51 99 f9 2e 88 9e d4 5c 0a dc f6 0c 0b d7 ff 1b a1 fd eb 4c f0 58 b4 81 12 20 fc a4 bc 50 ac 68 00 17 e8 ab 4c e8 6f 53 10 d8 44 7e 09 15 d2 05 aa 11 4e f4 fc 2f a7 b7 a7 48 d2 d6 66 14 1f d8 0b 79 33 41 68 51 e1 85 03 6b 67 cd 6f db 7e 5e 4c 13 32 45 b8 8f b8 53 e7 72 32 1d d9 83 36 15 56 7d ed 07 01 78 73 7d cb ff 3d 9c			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 22:29:32 - 09/08/23 16:29:32			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 22:29:33 - 09/08/23 16:29:33			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	29380315			
<b>Datos estampillados:</b>	v7N3Njo3ML+mT6HTHYs48ipu0zw=			





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	Enrique Martinez Guzman	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.32.68	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	09/08/23 22:54:45 - 09/08/23 16:54:45	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	4e 0e 8a e1 91 41 83 0f d9 cf 2a 74 bb 8e 0a 1e ae 6e a8 a8 fb 93 20 61 bf 24 d2 1f e1 e0 57 cf 23 1f 45 cb bf b2 17 79 99 8a e4 26 e7 e6 ff f8 98 ca 4f 06 69 4a 6e 56 6b 3e 64 06 5e 82 9f f0 39 ff 58 70 e5 7b c0 3a 41 cc 39 11 4e a1 8e c5 55 4e 97 ea 40 97 ac 67 76 d3 81 b6 2b 0e f3 38 86 87 23 73 45 e5 d3 9d d8 7d 8a 3a 82 1c a2 c8 38 9a be 78 f2 4d 0f 66 81 c8 ea 62 e9 d9 99 b9 06 cd 07 41 82 14 37 a9 29 8f 11 1c 8c fb 2e 38 11 03 cf 6f 56 b4 6f d3 7e b2 10 42 4d bf 78 4c 06 a3 ae 94 c6 3a b9 e3 f5 24 28 7a 01 e2 7d 3f af 4b e3 9f 8b 1b 92 97 eb 76 fc 9f 93 44 39 0c 16 f2 26 83 d6 47 c9 ad 1d a9 51 ba 85 0c 62 cf dd a1 ee 21 b2 ec bd be 6f 1c 5a f3 a1 80 24 0f 0f dd 44 4b fd 64 6a 9a e0 92 3b 32 10 a6 dd 5c 4d 57 f9 3a ab 62 52 25 fe 03 8b df 66 31 c3 ba			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 22:54:46 - 09/08/23 16:54:46			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	09/08/23 22:54:46 - 09/08/23 16:54:46			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	29393949			
<b>Datos estampillados:</b>	g209a5sRp/A/rLDM4FLGwF+uHQ0=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	SILVIA ESTREVER ESCAMILLA	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	10/08/23 16:33:40 - 10/08/23 10:33:40	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	37 39 b6 17 38 32 21 42 2e 2c ff 86 87 1e 99 de 36 9f 4a 51 6b 25 38 90 61 27 df 3f b6 89 01 35 a3 e4 32 03 a1 6c c0 a7 f5 9b a8 e8 79 80 d6 dd b6 dd 06 32 75 89 a5 2a 44 a6 b0 ca dc 34 50 42 81 e0 b8 b7 0c b9 11 bc 78 23 0d 4f 54 cc d6 04 9f c6 83 48 85 a8 43 7c b4 7f 20 d1 5a cf 68 84 a0 d8 40 05 80 1d e1 cf 01 f0 42 11 c1 85 83 dd 4c 41 07 75 6b 19 15 13 c0 96 be c6 4f 04 63 3c 64 08 81 8f 13 1c 75 f7 1b 48 05 4b 4c 8d 64 ec ac e1 11 10 18 a2 aa 22 ba 6e 38 e2 34 61 de f2 cc e6 a4 74 77 0a dc e7 a4 93 b2 a4 3d 10 8d c9 97 c3 c7 55 f5 ed 31 72 20 f5 80 df 36 13 c4 8d b7 69 3a 6d 23 94 d3 e8 13 e5 eb d8 d9 df b9 bf da 82 fc 0c 07 52 8a b2 ba b0 d0 91 c2 af dd 50 2e 45 d8 30 40 f6 e5 b1 a3 de 97 97 24 16 f5 fe d7 58 f1 19 4b ac 6d a0 7d 4e 19 62 ed 42 ef 34			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	10/08/23 16:33:40 - 10/08/23 10:33:40			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	10/08/23 16:33:40 - 10/08/23 10:33:40			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	29580044			
<b>Datos estampillados:</b>	5brRNdrPEbg5JotHlVesPHqwd30=			

El licenciado(a) Israel Jiménez Carrillo, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PJF - Versión Pública